**Bogotá D.C., marzo del 2021**

Doctor

**ALFREDO DELUQUE**

Presidente Comisión Primera

Cámara de Representantes

Ciudad

**REF: Ponencia positiva primer debate PL 436-2020C**

En cumplimiento del encargo recibido por parte de la honorable Mesa Directiva de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes y de conformidad con lo establecido en la Ley 5ª de 1992, procedo a rendir Informe de Ponencia positiva para primer debate al Proyecto de Ley N° 436 de 2020 Cámara *“Por medio de la cual se modifica y adiciona el Decreto Legislativo 806 del 04 de junio del 2020”.*

Cordialmente,

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**JUAN FERNANDO REYES KURI**

Representante a la Cámara por el Valle del Cauca

Partido Liberal

**PONENCIA POSITIVA PARA PRIMER DEBATE DEL PROYECTO DE LEY N° 436 DE 2020 CÁMARA *“POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA Y ADICIONA EL DECRETO LEGISLATIVO 806 DEL 04 DE JUNIO DEL 2020”.***

El presente informe está compuesto por diez (10) apartes:

1. Antecedentes
2. Objeto del proyecto de ley.
3. Cómo se resuelve el problema.
4. Expedición del Decreto 806 del 04 de junio del 2020.
5. Justificación del proyecto.
6. Conflictos de interés.
7. Pliego de modificaciones.
8. Proposición.
9. Texto propuesto
10. Referencias.
11. **ANTECEDENTES.**

El presente Proyecto de Ley N. 436 de 2020 fue radicado el día 29 de septiembre de 2020 por parte del suscrito. Fui designado como ponente el día 24 de noviembre del mismo año por parte de la mesa directiva de la cámara de representantes. Acto seguido se solicitó la realización de audiencia pública, con el fin de escuchar a las partes interesadas en el proyecto de ley en mención, que fue realizada el día 16 de febrero del 2021.

A continuación se hace referencia, a modo de resumen, a las intervenciones de los asistentes a dicha audiencia[[1]](#footnote-1):

* 1. **Gloria López, Presidenta del Consejo Superior de la Judicatura.**

La Presidenta del CSJ manifestó que al proyecto de ley que modifica el Decreto 806 de 2020 debe adicionarse a su aplicación la especialidad penal.

También, menciona que el proyecto de ley brinda el marco jurídico para seguir trabajando con el propósito contenido en el Plan de Desarrollo Sectorial y, en el recientemente expedido, plan de Transformación Digital de la Justicia.

Agrega que establecer como regla general el uso preferente de las TIC para dejar de ser opcional o facultativo, es quizá la mejor medida para agilizar los trámites y apropiar el uso de las herramientas tecnológicas.

Frente al articulado se hicieron, entre otros, los siguientes comentarios:

* **Artículo 1.** Incluir la especialidad penal.
* **Artículo 2.** Eliminar la referencia al Ministerio de Justicia y precisar en la redacción del parágrafo 3 que corresponde al CSJ, garantizar a cada uno de los servidores judiciales las herramientas tecnológicas y de conectividad.
* **Artículo 3.** Se sugiere agregar los términos “Conforme a lo dispuesto en el plan de Transformación digital” y las “condiciones de autenticidad, integridad y disponibilidad” como los atributos para garantizar el expediente electrónico, entre otras.
  1. **Luis Hernández, Presidente de la Corte Suprema de Justicia.**

El Presidente de la Corte Suprema de Justicia manifestó que los jueces demandan condiciones de trabajo adecuadas y que el Consejo Superior de la Judicatura es el obligado a brindar esas condiciones.

Menciona además, que al margen del proyecto, cualquier desarrollo tecnológico en cualquier entidad del Estado y en especial en la Justicia, hay que aplaudirlo y animarlo. Por ello, independientemente de que ya existen instrumentos jurídicos que habilitan el uso de las TIC en la justicia, considera que la redundancia en este caso no sobra.

Finalmente, entre otros comentarios, menciona que la administración de justicia respalda leyes que ordenen el desarrollo de las TIC en la Rama Judicial y en esa medida, espera que las leyes no queden en mandatos de buenas intenciones que, una vez aprobadas, se quedan a expensas de rogar por los recursos ante el Ministerio de Hacienda.

* 1. **Antonio Arias, Viceprocurador.**

El Viceprocurador menciona que en concepto de la Procuraduría, la necesidad que impuso la pandemia de organizar, a toda prisa, la transformación que durante años se esperaba, es un adelanto que no admite duda.

Considera que debe existir recursos apropiados para los retos que impone la aplicación indefinida de lo que el proyecto de ley busca.

Adicionalmente señala que se debe tener la oportunidad para discutir las figuras procesales que pueden estar obsoletas gracias a la virtualidad, como por ejemplo competencia territorial de los jueces, que a su juicio son temas que quizás quedan en el marco de un proceso en donde se vinculaba al proceso judicial con el expediente y, no como ahora, que estamos pensando en que ese juez pueda tener competencia en todo el país. Plantea esta inquietud para que se aproveche la oportunidad de hacer este proyecto de ley más ambicioso, como una medida para atender la congestión judicial.

* 1. **Aura Cifuentes, Directora de Gobierno Digital, Ministerio de las TIC.**

La directora de Gobierno Digital señala que el Ministerio firmó un memorando de entendimiento para llevar a cabo la implementación del Expediente Judicial, como punto de partida de la transformación digital del sector justicia.

Menciona que para el Ministerio es importante empezar a apoyar y materializar todos los lineamientos que ha dado la entidad en proyectos específicos, dado que esto tiene alto impacto. También señala que la meta para el Expediente Judicial es que este sea interoperable para el año 2022.

Adicionalmente, argumenta que para el Ministerio es muy importante la consolidación de la interoperabilidad como instrumento habilitante frente a los retos que tienen hoy los sistemas de información y las plataformas instituciones públicas. También trae a colación los distintos logros que se han obtenido en el trabajo realizado por este Ministerio.

* 1. **Jorge Mora, docente Universidad Libre.**

El docente sugiere analizar la posibilidad de eliminar la inspección judicial en los procesos declarativos de pertenencia, tal y como está contemplado en el artículo 5 del proyecto de ley, argumentando que este tipo de procesos tienen lugar en zonas rurales afectadas por el conflicto armado y, es justamente este elemento, el que debe comprobar el juez al momento de realizar la inspección judicial.

También, señala que frente a las notificaciones personales es importante que exista una política pública en cabeza de la Registraduría para que se involucre el correo electrónico en la cédula de todos los ciudadanos y ciudadanas. Argumenta que esta medida garantiza el derecho a la defensa y la publicidad del proceso. Esto lo propone porque el Decreto 806 de 2020 le deja la carga al demandante de informarle al juez el canal digital por el que se va a realizar el acto notificación.

Sugiere además, adicionar reglas concretas al artículo 107 del CGP, que establece de manera general reglas para las audiencias y diligencias. Considera que este artículo estaba pensado para las audiencias presenciales y en tiempos de justicia digital debe pensarse las reglas aplicables a este tipo de audiencias.

Insiste también en la posible eliminación del factor territorial para aquellos procesos que se inician de forma digital, con el fin de lograr la garantía de la tutela judicial efectiva, pues equilibra la carga laboral de todos los jueces y se podrán tener los fallos en un menor tiempo.

Finalmente, cierra su intervención señalando que la idea del proyecto es una idea valiosa que debe apoyarse desde la academia, los abogados litigantes, jueces y juezas.

* 1. **Nelson Rueda, Observatorio de intervención ciudadana, Universidad Libre.**

El delegado del Observatorio también insiste en la necesidad de contar con los recursos requeridos para implementar lo dispuesto en la ley y que se convierta en una verdadera política pública de transformación de la Justicia. También que esto se debe implementar con articulación de todos los actores.

Frente al articulado, menciona que es acertado darle al Decreto 806 una vigencia indefinida y que se debería analizar la posibilidad de darle a este proyecto de ley una estructura general más parecido al CGP.

En cuanto a la digitalización, sugiere que esta sea a través de un solo sistema que maneje las conciliaciones, títulos judiciales, audiencias, notificaciones, etc. Insiste en este punto que este es un tema de política, de presupuesto y de manejar las barreras que se tienen a nivel nacional en el acceso a la tecnología. Entre otros comentarios.

* 1. **Comentarios escritos.**

A la secretaría también se allegó comunicación escrita del Consejo de Estado, que señaló que no tienen ningún comentario al respecto, dado que las modificaciones y adiciones propuestas no son de carácter judicial, sino que son medidas administrativas para la implementación del manejo virtual de los procesos.

De igual manera, el Decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, José Gaitán y el Docente Gabriel Hernández, hicieron llegar sus comentarios preliminares sobre el proyecto de ley en mención.

También se contó con la participación remota de los H.R. Margarita Restrepo, Cesar Lorduy y Jorge Tamayo.

1. **OBJETO**

La presente iniciativa tiene por objeto central fortalecer el uso de las herramientas tecnológicas en los procesos judiciales a través de la modificación y ampliación del Decreto Legislativo 806 del 2020, con el fin de facilitar el acceso a la administración de justicia y mejorar la eficacia, eficiencia en general en la Rama Judicial.

1. **CÓMO SE RESUELVE EL PROBLEMA**

El proceso judicial es la secuencia ordenada de actuaciones que adelantan cada uno de los actores con observancia de las formas y principios procesales. Por esta razón, debe plantearse el uso de las herramientas tecnológicas en cada una de las etapas procesales para así construir las bases de una modernización integral de la Rama Judicial.

Teniendo esto en cuenta, el presente proyecto aborda cada una de las etapas dentro de un proceso judicial con el fin de fomentar el uso de las TIC desde la audiencia de conciliación hasta la resolución de los recursos que sobre la providencia se presenten. Plantea el uso de la tecnología de manera habitual en los servicios que se prestan al usuario judicial pero simultáneamente dota de herramientas nuevas a los operadores judiciales para facilitar su labor.

1. **EXPEDICIÓN DEL DECRETO LEGISLATIVO 806 DEL 04 DE JUNIO DEL 2020**

Con ocasión a los hechos que se desarrollaron con posterioridad a la propagación del Covid-19, que fue considerado como una pandemia por la Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo de 2020 y luego de que, mediante Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social, se decretara el Estado de emergencia sanitaria en todo el territorio nacional, el Presidente de la República decretó el Estado de Emergencia Económica, Ecológica y Social por medio del Decreto Legislativo 417 del 17 de marzo de 2020.

Esta declaratoria fue con el fin de hacer frente a las circunstancias imprevistas y detonantes de la crisis económica y social generada por la pandemia del nuevo Coronavirus COVID-19, por lo cual se hacía necesario adoptar medidas extraordinarias que permitieran conjurar los efectos de la crisis en la que estaba la totalidad del territorio nacional, en particular, aquellas que permitan acudir a mecanismos de apoyo al sector salud, y mitigar los efectos económicos que estaba enfrentando el país. (Presidente de la República de Colombia, 2020). Luego de cumplidos los treinta días de declaratoria con las cifras de contagio ascendiendo y la crisis económica profundizándose, se expediría nuevamente la declaratoria de Emergencia Económica, Ecológica y Social en el Decreto 637 del 6 de mayo de 2020.

En sentencia de constitucionalidad C-145 del 2020 la Corte Constitucional expuso que los estados de excepción:

*“son situaciones previstas y consentidas por la Constitución. En lugar de esperar la ruptura completa del orden constitucional, la Constitución prevé una situación de anormalidad constitucional, en la que se invierte el principio democrático, facultando al órgano ejecutivo para dictar normas con fuerza de ley”. Como se trata de una situación extraordinaria donde la ley no es aprobada por el legislador, la Carta Política a su vez impone una serie de limitaciones, de los cuales se deriva la interpretación restrictiva de las facultades del Gobierno nacional como única opción compatible con la democracia constitucional”.*

Por lo cual el Presidente estaba facultado para expedir Decretos con fuerza de Ley siempre y cuando cumplieran con por lo menos seis requisitos a saber:

* + 1. Ser debidamente motivados
    2. Contar con la firma de todos los ministros
    3. Estar destinados a conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos.
    4. Expedirse dentro de la declaratoria de Estado de Emergencia
    5. Respetar las libertades fundamentales
    6. Respetar la iniciativa Congresional en leyes orgánicas y estatutarias.

Para conservar la división de las ramas del poder público durante el año siguiente a la declaratoria de la emergencia, el Congreso está facultado para modificar, derogar o adicionar los decretos legislativos expedidos con las facultades dadas por el artículo 215 de la Constitución. Así las cosas, el Presidente estaba facultado para decretar y adoptar medidas para salvaguardar el bienestar común y continuar con el debido ejercicio de la función pública.

Es así como mediante el Decreto Legislativo 806 del 2020 expidió normas destinadas a que los procesos judiciales se puedan tramitar, en la mayoría de los casos, virtualmente, y con ello garantizar el acceso a la administración de justicia y el derecho a la salud de los operadores judiciales y al trabajo de los litigantes y usuarios.

En este decreto se dictaron medidas para la continuidad de los procesos que se adelantan ante la Rama Judicial, las autoridades administrativas con funciones jurisdiccionales y los árbitros garantizando el debido proceso, la publicidad y el derecho de contradicción de las partes.

Se adoptan medidas transitorias para implementar el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en los procesos judiciales, se dispuso la aplicación y validez de la notificación a las partes y demás sujetos procesales a través de medios digitales, se eliminó el requisito de presentación física del poder, se permitió que la radicación de la demanda y sus anexos se pudiese realizar por correo electrónico, se permitió el emplazamiento por medios digitales, entre tantas otras medidas.

1. **JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO**

La administración de justicia se erige como un derecho fundamental y simultáneamente como uno de los pilares del Estado democrático liberal. Por tanto, su debida administración a través de la expedición de fallos judiciales en términos prudentes significa para la ciudadanía el efectivo acceso a la justicia y confianza frente a los operadores judiciales.

En la actualidad, la congestión judicial alcanzó el 50,75%. Lo que significa que por cada cien (100) procesos que se hallaban en los despachos judiciales, cincuenta (50) quedaron pendientes para trámite y resolución de fondo en la actual vigencia (Contraloría General de la República, 2020).

Ante la ausencia de un uso generalizado de las tecnologías de la información y de las comunicaciones en los procesos judiciales por parte de todos los actores involucrados, se crea la necesidad de implementar una normatividad que fomente y establezca el uso de la tecnología en cada una de las actuaciones judiciales.

En su informe al Congreso de la República, el Consejo Superior de la Judicatura reconoció la necesidad de continuar con la implementación de las TIC con el fin de ofrecer soluciones a los usuarios de los servicios de la justicia, en términos del CSJ *“la gestión judicial obliga a revisar y replantear la arquitectura de negocio y a generar una estructura cuyo elemento principal sea la modernización de todos los sistemas, procesos y procedimientos.”* (Consejo Superior de la Judicatura, 2019)

La pandemia generada por la Covid-19 sirvió como catalizador para privilegiar *“el uso de los medios tecnológicos para la gestión judicial y administrativa, lo cual además de responder a la crisis ha entrado a formar parte del proceso de modernización y transformación digital de la Rama Judicial”* (Consejo Superior de la Judicatura, 2020)

Sin embargo, los esfuerzos a realizar por parte de la Rama Judicial deben ser acompañados por el legislador para dar el salto tecnológico que contribuya a atacar el histórico problema de la congestión judicial del cual se tiene referencias desde la década de los cincuenta. Tal y como lo manifestó Rodrigo Uprimny Yepes, César Rodríguez Garavito y Mauricio García Villegas (2006):

*“La historia de la congestión en la justicia civil no es nueva. De acuerdo con las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y el Consejo Superior de la Judicatura (1997), desde 1959 hasta el inicio de la década de los noventa existió un aumento sostenido de los procesos pendientes en Colombia, que logró su punto más alto en 1989, cuando alcanzó casi los 6.000 procesos represados.”* (Rodrigo Uprimny Yepes, 2016)

Por otro lado, se muestran datos de la actividad judicial durante la pandemia en el año 2020, con el uso de las TIC disponibles. Lo que, según la Presidenta del Consejo Superior de la Judicatura (2021), se demuestra que es viable prestar el servicio en los términos de una Justicia abierta y transparente:

**Tabla 1. Uso de las TIC en la justicia.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Herramienta** | **Número** |
| Audiencias virtuales | 229.483 |
| Videoconferencias | 627.273 |
| Total | 856.756 |
| Cuentas de correo institucionales | 39.088 |
| Micro sitios en el Portal Web de la Rama | 6.323 |
| Consulta Nacional Unificada de Procesos | 13.631.667 |

**Fuente:** CSJ (2021), Comunicación audiencia pública PL 436 de 2020C

Finalmente, se considera que el presente proyecto, adopta las medidas que trajo consigo el Decreto Legislativo 806 del 2020 en búsqueda de fortalecer la transformación digital en la administración de la justicia con el fin de que se garanticen efectivamente derechos individuales y que la confianza ciudadana en las ramas del poder público retorne.

* 1. **LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN COLOMBIA**

Imaginemos la Ley como las partituras dadas a un intérprete para que ejecute la obra en consideración a los tiempos, al ritmo que lo descrito le exige. La ejecución de las notas debe ceñirse estrictamente al *tempo* o de lo contrario la música que se produce es errónea o no genera agrado al oyente. Sin importar las grandes características de las partituras todo el trabajo recaerá en el intérprete, una nota tocada a destiempo u omitida altera la naturaleza de la obra y no produce en quien escucha las sensaciones originales del autor.

El juez es ese intérprete al que se le da unos mandatos legales para que resuelva de manera imparcial, independiente, autónoma, ágil, eficiente y eficaz los conflictos que surjan entre las personas en general, donde se discute la titularidad de un derecho consagrado en el ordenamiento jurídico. (Sentencia C-242, 1997). Los principales objetivos de esos acordes dados al Juez son la pacífica resolución de los conflictos y el cumplimiento de una tarea básica del Estado. Sin embargo, la tarea no solo debe ser ejecutada con imparcialidad, sino que debe atender a la noción popular de justicia donde la oportunidad de los fallos se equipara al contenido de estos.

Con más precisión, se puede establecer en términos adjudicados a Séneca que *“Nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía”* y esta es una problemática que ha inquietado históricamente a los pueblos y ha traído consigo reformas estructurales a la forma como se administra justicia. La creación de los Códigos procesales atiende en parte, precisamente a ese llamado de justicia pronta como condición para disminuir la conflictividad dentro de una sociedad y para justificar la existencia del orden estatal.

En Colombia, la administración de justicia de acuerdo con el artículo 116 CP, está dada a los órganos que integran la rama judicial, a algunas autoridades administrativas, al Congreso de la República y a los particulares bajo determinadas circunstancias. El artículo 228 CP establece que la administración de justicia es una función pública, lo que significa que goza de plena independencia de los otros poderes públicos y no puede ser interrumpida en ninguna circunstancia. (Restrepo, 2018)

La administración de justicia tiene entonces dos concepciones, además de ser una facultad del Estado es un derecho de los administrados. La Ley Estatutaria de Administración de Justicia (LEAJ)[[2]](#footnote-2), atiende entre otros principios la celeridad y eficiencia:

*“(…) que hacen alusión a que la justicia debe ser prestada de manera oportuna (en complimiento de los términos procesales) y que los funcionarios judiciales –como servidores públicos que son- deben ser diligentes en los asuntos que se tramitan en los despachos judiciales, respetando los derechos de las partes procesales (art. 9.°), teniendo en cuenta que esa atención diligente y oportuna es una manifestación del derecho de acceso a la administración de justicia.”* (Restrepo, 2018)

Como expresa (Restrepo, 2018) la administración de justicia se trata de que el Estado ofrezca a quienes se encuentran bajo su jurisdicción las condiciones necesarias para acudir a un aparato judicial autónomo e independiente con el objeto de obtener una respuesta ajustada a derecho, *dentro de un plazo razonable* y respetando las garantías básicas del debido proceso.

La Corte Constitucional parece aceptar, al menos en parte, la máxima estoica al considerar que la mora judicial manifiesta en una decisión judicial tardía constituye en sí misma una injusticia:

*“En ese orden de ideas, la jurisdicción no cumple con la tarea que le es propia, si los procesos se extienden indefinidamente, prolongando de esta manera, la falta de decisión sobre las situaciones que generan el litigio, atentando así, gravemente contra la seguridad jurídica que tienen los ciudadanos. (…)* ***Así las cosas, vale decir, que una decisión judicial tardía, constituye en sí misma una injusticia, como quiera que los conflictos que se plantean quedan cubiertos por la incertidumbre, con la natural tendencia a agravarse.”***(Sentencia T-577, 1998)

Queda planteada la administración de justicia como un derecho fundamental de las personas, así como una base principal del funcionamiento de una democracia liberal. Por lo cual, las demoras en la expedición de los fallos judiciales implican una afectación individual, pero sobre todo una contradicción en los objetivos esenciales del Estado (Art.2 CP).

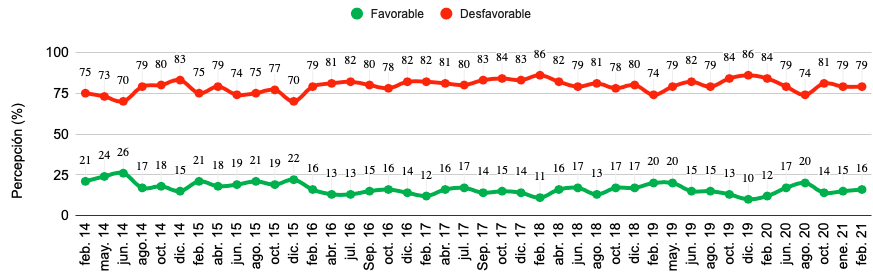
* 1. **CONGESTIÓN JUDICIAL**

La congestión judicial entendida como la acumulación desproporcionada de procesos sin resolver en contraposición a la cantidad y calidad de los operadores judiciales tiene implicaciones más allá de las estadísticas administrativas de buen funcionamiento de las entidades. La ineficacia para administrar justicia termina siendo evidenciada en los porcentajes de impunidad y en la poca credibilidad de las ciudadanas frente al sistema judicial para resolver sus disputas.

De acuerdo con la Contraloría General de la República (2020), en 2019, el índice de congestión judicial efectivo alcanzó el 50,75%. Lo que significa que por cada cien (100) procesos que se hallaban en los despachos judiciales, cincuenta (50) quedaron pendientes para trámite y resolución de fondo en la actual vigencia. La Contraloría en su seguimiento realizado a la rama judicial recomienda:

*“(…) (E)l sector judicial debe profundizar en la habilitación y utilización de nuevas tecnologías tales como Inteligencia artificial, Big Data (Mega Data), bancos de datos e inteligencia de negocios, herramientas de las que ya dispone este organismo de control para ejercer sus funciones de control preventivo, vigilar en tiempo real el manejo de los recursos públicos y derrotar sin contemplaciones a los corruptos. Hay que masificar el “Expediente Electrónico” y digitalizar los trámites y procesos, es una de las propuestas que plantea el organismo de control. También urge capacitar a los servidores en nuevas tecnologías que permitan la optimización de recursos y la descongestión de los despachos, a través de un modelo de arquitectura empresarial.”* (Contraloría General de la República, 2020).

Por otro lado, la encuesta INVAMER muestra que la administración de justicia desde el año 2014 tiene un porcentaje de imagen desfavorable ante la ciudadanía. También muestra que desde el 2014 el porcentaje de favorabilidad nunca ha superado el 20%.

**Tomado de:** CEJ 2021- Basado en Encuesta INVAMER

1. **CONFLICTOS DE INTERÉS.**

Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 3 de la Ley 2003 del 19 de noviembre de 2019, por la cual se modifica parcialmente la Ley 5 de 1992, se hacen las siguientes consideraciones:

Se estima que la discusión y aprobación del presente Proyecto de Ley no genera conflictos de interés, puesto que es de carácter general y no genera beneficios directos, particulares y actuales directos para los congresistas o para sus familiares, dentro del grado que determina la ley.

Sobre este asunto ha señalado el Consejo de Estado (2019):

*“No cualquier interés configura la causal de desinvestidura en comento, pues se sabe que sólo lo será aquél del que se pueda predicar que es directo, esto es, que per se el alegado beneficio, provecho o utilidad encuentre su fuente en el asunto que fue conocido por el legislador; particular, que el mismo sea específico o personal, bien para el congresista o quienes se encuentren relacionados con él; y actual o inmediato, que concurra para el momento en que ocurrió la participación o votación del congresista, lo que excluye sucesos contingentes, futuros o imprevisibles. También se tiene noticia que el interés puede ser de cualquier naturaleza, esto es, económico o moral, sin distinción alguna”.*

De igual forma, es pertinente señalar lo que la Ley 5 de 1992 dispone sobre la materia en el artículo 286, modificado por el artículo 1 de la Ley 2003 de 2019:

*“Se entiende como conflicto de interés una situación donde la discusión o votación de un proyecto de ley o acto legislativo o artículo, pueda resultar en un beneficio particular, actual y directo a favor del congresista.*

*a) Beneficio particular: aquel que otorga un privilegio o genera ganancias o crea indemnizaciones económicas o elimina obligaciones a favor del congresista de las que no gozan el resto de los ciudadanos. Modifique normas que afecten investigaciones penales, disciplinarias, fiscales o administrativas a las que se encuentre formalmente vinculado.*

*b) Beneficio actual: aquel que efectivamente se configura en las circunstancias presentes y existentes al momento en el que el congresista participa de la decisión.*

*c) Beneficio directo: aquel que se produzca de forma específica respecto del congresista, de su cónyuge, compañero o compañera permanente, o parientes dentro del segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.”*

Se recuerda que la descripción de los posibles conflictos de interés que se puedan presentar frente al trámite del presente proyecto de ley, conforme a lo dispuesto en el artículo 291 de la ley 5 de 1992 modificado por la ley 2003 de 2019, no exime al Congresista de identificar causales adicionales.

1. **PLIEGO DE MODIFICACIONES.**

Para la presente ponencia se proponen las siguientes modificaciones:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TEXTO RADICADO** | **TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER DEBATE** | **COMENTARIO** |
| “Por medio de la cual se modifica y adiciona el Decreto Legislativo 806 del 04 de junio del 2020” | **Sin cambios** |  |
| **Artículo 1°. Objeto.** La presente ley tiene por objeto modificar y adicionar el Decreto Legislativo 806 del 04 de junio del 2020 con el fin de fortalecer el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales y agilizar el trámite de los procesos judiciales ante la jurisdicción ordinaria en las especialidades civil, laboral, familia, jurisdicción de lo contencioso administrativo, jurisdicción constitucional y disciplinaria, así como, las actuaciones de las autoridades administrativas que ejerzan funciones jurisdiccionales y en los procesos arbitrales. | **Artículo 1°. Objeto.** La presente ley tiene por objeto modificar y adicionar el Decreto Legislativo 806 del 04 de junio del 2020 con el fin de fortalecer el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales y agilizar el trámite de los procesos judiciales ante la jurisdicción ordinaria en las especialidades civil, laboral, familia, jurisdicción de lo contencioso administrativo, jurisdicción constitucional, **penal** y disciplinaria, así como, las actuaciones de las autoridades administrativas que ejerzan funciones jurisdiccionales y en los procesos arbitrales. | Sobre este punto se acoge los comentarios realizados en la audiencia pública por la Presidenta del CSJ, quien propuso ampliar la aplicación del Decreto 806 de 2020 a la especialidad penal. |
| **Artículo 2°. ~~Adiciónese un parágrafo~~ al artículo 2° del Decreto Legislativo 806 de 2020, el cual quedará así:**  **Parágrafo 3°.**  ~~El Ministerio de Justicia~~ ~~deberá~~ garantizar a cada uno de los servidores judiciales las herramientas tecnológicas y las garantías de conectividad suficientes para adelantar el trámite de los procesos judiciales y asuntos en curso. | **ARTÍCULO 2°. Modifíquese el 2° del Decreto Legislativo 806 de 2020, el cual quedará así:**  **ARTÍCULO 2. Uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones.** Se deberán utilizar las tecnologías de la información y de las comunicaciones **o mensajes de datos**,en la gestión y trámite de los procesos judiciales y asuntos en curso, con el fin de facilitar y agilizar el acceso a la justicia, como también proteger a los servidores judiciales, como a los usuarios de este servicio público.  Se utilizarán los medios tecnológicos para todas las actuaciones, audiencias y diligencias y se permitirá a los sujetos procesales actuar en los procesos o trámites a través de los medios digitales disponibles, evitando exigir y cumplir formalidades presenciales o similares, que no sean estrictamente necesarias. Por tanto, las actuaciones no requerirán de firmas manuscritas o digitales, presentaciones personales o autenticaciones adicionales, ni incorporarse o presentarse en medios físicos.  Las autoridades judiciales darán a conocer en su página web los canales oficiales de comunicación e información mediante los cuales prestarán su servicio, así como los mecanismos tecnológicos que emplearán.  En aplicación de los convenios y tratados internacionales se prestará especial atención a las poblaciones rurales y remotas, así como a los grupos étnicos y personas con discapacidad que enfrentan barreras para el acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones, para asegurar que se apliquen criterios de accesibilidad y se establezca si se requiere algún ajuste razonable que garantice el derecho a la administración de justicia en igualdad de condiciones con las demás personas.  **Para cumplir con lo dispuesto en este artículo, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público garantizará los ajustes y apropiaciones presupuestales que sean necesarias**.  **PARÁGRAFO 1.** Se adoptarán todas las medidas para garantizar el debido proceso, la publicidad y el derecho de contradicción en la aplicación de las tecnologías de la información y de las comunicaciones. Para el efecto, las autoridades judiciales procurarán la efectiva comunicación virtual con los usuarios de la administración de justicia y adoptarán las medidas pertinentes para que puedan conocer las decisiones y ejercer sus derechos.    **PARÁGRAFO 2.**  Los municipios, personerías y otras entidades públicas, en la medida de sus posibilidades, facilitarán que los sujetos procesales puedan acceder en sus sedes a las actuaciones virtuales.  **PARÁGRAFO 3. En caso de requerirse el cumplimiento de las funciones de la Rama Judicial de manera remota o por medios digitales, el Gobierno Nacional y el Consejo Superior de la Judicatura deberán** garantizar a cada uno de los servidores judiciales las herramientas tecnológicas y las garantías de conectividad suficientes para adelantar el trámite de los procesos judiciales y asuntos en curso. | Sobre este artículo se acoge parcialmente los comentarios realizados en la audiencia pública por la Presidenta del CSJ, del Decano de la facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, así como del observatorio de intervención ciudadana de la Universidad Libre, entre otros intervinientes. |
| **Artículo 3°. Modifíquese el artículo 4 del Decreto Legislativo 806 de 2020, el cual quedará así: Expedientes digitales.** El Consejo Superior de la Judicatura, a través de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y del Centro de Documentación Judicial-CENDOJ-, ~~deberá diseñar~~ el Plan de Digitalización de la Rama Judicial ~~e implementar~~ la digitalización de los documentos del expediente digital de todos los procesos judiciales en curso bajo estándares fijados en la Ley 527 de 1991 y de las que la reformen, en un término de (2) dos años contados a partir de la expedición de la presente Ley.  Para tal fin creará carpetas electrónicas actualizables para cada expediente conformado bajo los parámetros de gestión documental electrónica que fijará el CENDOJ.  **Parágrafo.** El Consejo Superior de la Judicatura ~~destinará~~ recursos ~~especiales~~ para lograr la digitalización total de los procesos judiciales con el apoyo de talento humano del Servicio Nacional de Aprendizaje. | **ARTÍCULO 3°. Modifíquese el artículo 4 del Decreto Legislativo 806 de 2020, el cual quedará así:**  **Artículo 4. Expedientes digitales.**  El Consejo Superior de la Judicatura, a través de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y del Centro de Documentación Judicial-CENDOJ-, **implementará** el Plan de Digitalización de la Rama Judicial y la digitalización de los documentos del expediente digital de todos los procesos judiciales en curso, bajo estándares fijados en la Ley 527 de 1991 y de las que la reformen, en un término de (2) dos años contados a partir de la expedición de la presente Ley.  Para tal fin creará carpetas electrónicas actualizables para cada expediente conformado bajo los parámetros de gestión documental electrónica que fijará el CENDOJ **y los estándares fijados en la Ley 527 de 1991.**  **PARÁGRAFO. El Gobierno Nacional y el Consejo Superior de la Judicatura garantizarán y destinarán los recursos necesarios** para lograr la digitalización total de los procesos judiciales con el apoyo de talento humano del Servicio Nacional de Aprendizaje. | Sobre este artículo se acoge parcialmente los comentarios realizados en la audiencia pública por la Presidenta del CSJ. |
| **Artículo nuevo** | **ARTÍCULO 4. Adiciónese un parágrafo al artículo 8 del Decreto Legislativo 806 de 2020, el cual quedará así:**  **PARÁGRAFO 3.** La Registraduría del Estado Civil, en el marco de la implementación de los servicios ciudadanos digitales y a sus funciones, en especial las relacionadas con la identificación de los colombianos, propenderá por incluir en el registro de la cédula digital los datos correspondientes al correo electrónico, con el fin de facilitar la notificación personal de los procesos judiciales. | Sobre este artículo se acoge los comentarios realizados en la audiencia pública por el Docente Jorge Mora, de la Universidad Libre. |
| **Artículo 4°. Adiciónese un artículo al Decreto Legislativo 806 de 2020, el cual quedará así:**  **Artículo 7A. Audiencias de Conciliación:**  Con la observancia plena de las garantías procesales se podrán adelantar las actuaciones dentro del trámite conciliatorio y las audiencias de conciliación por parte de los conciliadores de centros de conciliación, los servidores públicos facultados para conciliar y los notarios mediante el uso de medios tecnológicos o digitales.  Para tal fin, los Centros de Conciliación ~~tendrán la obligación de~~ ~~adaptar l~~a prestación ~~de~~ ~~sus~~ ~~servicios~~ mediante herramientas tecnológicas que faciliten la atención virtual ciudadana. | **ARTÍCULO 5°. Adiciónese un artículo al Decreto Legislativo 806 de 2020, el cual quedará así:**  **Artículo 7A. Audiencias de Conciliación:**  Con la observancia plena de las garantías procesales se podrán adelantar las actuaciones dentro del trámite conciliatorio y las audiencias de conciliación por parte de los conciliadores de centros de conciliación, los servidores públicos facultados para conciliar y los notarios mediante el uso de medios tecnológicos o digitales.  Para tal fin, los Centros de Conciliación **y demás personas jurídicas de carácter público y privado que presten este tipo de servicios,** **propenderán** **por** la prestación del **servicio** mediante herramientas tecnológicas que faciliten la atención virtual ciudadana. | Se ajusta redacción del artículo, con el fin de agregar a todos los sujetos pasivos que prestan los servicios de solución alternativa de conflictos. |
| **Artículo 5°. Adiciónese un artículo al Decreto Legislativo 806 de 2020, el cual quedará así:**  **Artículo 11A.** Inspección Judicial: Cuando dentro de un proceso sea necesaria la práctica de la inspección judicial el juez podrá emplear medios tecnológicos y vehículos de control remoto, que garanticen la verificación y el esclarecimiento~~s~~ de los hechos materia del proceso. ~~En los procesos de pertenencia, servidumbre y declaración de bienes vacantes o mostrencos no será obligatoria la inspección judicial.~~ | **ARTÍCULO 6°. Adiciónese un artículo al Decreto Legislativo 806 de 2020, el cual quedará así:**  **Artículo 11A.** Inspección Judicial: Cuando dentro de un proceso sea necesaria la práctica de la inspección judicial el juez podrá emplear medios tecnológicos y vehículos de control remoto, que garanticen la verificación y el esclarecimiento de los hechos materia del proceso. | Sobre este artículo se acoge los comentarios realizados en la audiencia pública por el Docente Jorge Mora, de la Universidad Libre y del Observatorio de Intervención Ciudadana de la misma universidad, referidos a la inspección judicial. |
| **Artículo 6°. Adiciónese un artículo al Decreto Legislativo 806 de 2020, el cual quedará así:** **Artículo 2A: Interoperabilidad de los sistemas de información.** Los sistemas de información utilizados por la Rama Judicial para adelantar y consultar los procesos judiciales deberán ser interoperables entre sí, con el fin de facilitar el cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales.  Para implementar lo dispuesto en este artículo la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura adoptará las medidas necesarias e incluirá en el Plan de Justicia Digital lo correspondiente, en complemento a lo dispuesto en el artículo 103 de la ley 1564 de 2012. | **ARTÍCULO 7°. Adiciónese un artículo al Decreto Legislativo 806 de 2020, el cual quedará así:** **Artículo 2A: Interoperabilidad de los sistemas de información.** Los sistemas de información utilizados por la Rama Judicial para adelantar y consultar los procesos judiciales deberán ser interoperables entre sí, con el fin de facilitar el cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales.  Para implementar lo dispuesto en este artículo, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura adoptará las medidas necesarias e incluirá en el Plan de Justicia Digital lo correspondiente, en complemento a lo dispuesto en el artículo 103 de la ley 1564 de 2012.  **Para cumplir con lo dispuesto en este artículo, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público garantizará los ajustes y apropiaciones presupuestales que sean necesarias**. | Ateniendo los comentarios de los intervinientes en la audiencia pública, se agrega un nuevo inciso. |
| **Artículo 7°. Adiciónese un artículo al Decreto Legislativo 806 de 2020, el cual quedará así:**  **Artículo 11B. Orden y autorizaciones de pago virtuales.** Todas las órdenes y autorizaciones de pago de cualquier concepto de depósitos judiciales en procesos judiciales de todas las especialidades y jurisdicciones ~~se podrán realizará~~ a través ~~del~~ ~~portal virtual que~~ ~~habilite el~~ Consejo Superior de la Judicatura sin acudir a ningún trámite o actuación adicional que implique el diligenciamiento y firma en formatos en físico. | **ARTÍCULO 8°. Adiciónese un artículo al Decreto Legislativo 806 de 2020, el cual quedará así:**  **Artículo 11B. Orden y autorizaciones de pago virtuales.** Todas las órdenes y autorizaciones de pago de cualquier concepto de depósitos judiciales en procesos judiciales de todas las especialidades y jurisdicciones **deberán realizarse** a través **medios digitales. Para ello** el Consejo Superior de la Judicatura **habilitará un portal para poder realizar el pago** sin acudir a ningún trámite o actuación adicional que implique el diligenciamiento y firma en formatos en físico.  **Lo anterior, sin perjuicio de la habilitación de canales presenciales.**  **Para cumplir con lo dispuesto en este artículo, el Gobierno Nacional y el Consejo Superior de la Judicatura garantizarán los ajustes y apropiaciones presupuestales que sean necesarias**. | Se cambia redacción con el fin de dar más claridad sobre el contenido del artículo.  Se agrega un inciso nuevo con el fin de atender varios comentarios de los intervinientes, frente a la garantía de los recursos para lograr su implementación. |
| **Artículo 8°. Modifíquese el artículo 16 del Decreto Legislativo 806 de 2020, el cual quedará así:**  El presente decreto legislativo rige a partir de su publicación. | **Artículo 9°. Modifíquese el artículo 16 del Decreto Legislativo 806 de 2020, el cual quedará así:**  **Artículo 16. vigencia y derogatoria.** El presente decreto legislativo rige a partir de su publicación. | **Se cambia redacción.** |
|  | **Artículo 10. Vigencia.** La presente ley rige a partir de su promulgación. | **Artículo nuevo.** |

1. **PROPOSICIÓN.**

Con fundamento en las anteriores consideraciones, de manera respetuosa solicito a la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, dar primer debate y aprobar Proyecto de Ley N° 436 de 2020 Cámara *“Por medio de la cual se modifica y adiciona el Decreto Legislativo 806 del 04 de junio del 2020”*, conforme al pliego que se anexa.

De los honorables congresistas,

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**JUAN FERNANDO REYES KURI**

Representante a la Cámara por el Valle del Cauca

Partido Liberal

1. **TEXTO PROPUESTO.**

**TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER DEBATE DEL PROYECTO DE LEY N° 436 DE 2020 CÁMARA *“POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA Y ADICIONA EL DECRETO LEGISLATIVO 806 DEL 04 DE JUNIO DEL 2020”.***

**EL CONGRESO DE COLOMBIA,**

**DECRETA:**

**ARTÍCULO 1°. Objeto.** La presente ley tiene por objeto modificar y adicionar el Decreto Legislativo 806 del 04 de junio del 2020 con el fin de fortalecer el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales y agilizar el trámite de los procesos judiciales ante la jurisdicción ordinaria en las especialidades civil, laboral, familia, jurisdicción de lo contencioso administrativo, jurisdicción constitucional, **penal** y disciplinaria, así como, las actuaciones de las autoridades administrativas que ejerzan funciones jurisdiccionales y en los procesos arbitrales.

**ARTÍCULO 2°. Modifíquese el 2° del Decreto Legislativo 806 de 2020, el cual quedará así:**

**ARTÍCULO 2. Uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones.** Se deberán utilizar las tecnologías de la información y de las comunicaciones **o mensajes de datos**,en la gestión y trámite de los procesos judiciales y asuntos en curso, con el fin de facilitar y agilizar el acceso a la justicia, como también proteger a los servidores judiciales, como a los usuarios de este servicio público.

Se utilizarán los medios tecnológicos para todas las actuaciones, audiencias y diligencias y se permitirá a los sujetos procesales actuar en los procesos o trámites a través de los medios digitales disponibles, evitando exigir y cumplir formalidades presenciales o similares, que no sean estrictamente necesarias. Por tanto, las actuaciones no requerirán de firmas manuscritas o digitales, presentaciones personales o autenticaciones adicionales, ni incorporarse o presentarse en medios físicos.

Las autoridades judiciales darán a conocer en su página web los canales oficiales de comunicación e información mediante los cuales prestarán su servicio, así como los mecanismos tecnológicos que emplearán.

En aplicación de los convenios y tratados internacionales se prestará especial atención a las poblaciones rurales y remotas, así como a los grupos étnicos y personas con discapacidad que enfrentan barreras para el acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones, para asegurar que se apliquen criterios de accesibilidad y se establezca si se requiere algún ajuste razonable que garantice el derecho a la administración de justicia en igualdad de condiciones con las demás personas.

**Para cumplir con lo dispuesto en este artículo, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público garantizará los ajustes y apropiaciones presupuestales que sean necesarias**.

**PARÁGRAFO 1.** Se adoptarán todas las medidas para garantizar el debido proceso, la publicidad y el derecho de contradicción en la aplicación de las tecnologías de la información y de las comunicaciones. Para el efecto, las autoridades judiciales procurarán la efectiva comunicación virtual con los usuarios de la administración de justicia y adoptarán las medidas pertinentes para que puedan conocer las decisiones y ejercer sus derechos.

**PARÁGRAFO 2.**  Los municipios, personerías y otras entidades públicas, en la medida de sus posibilidades, facilitarán que los sujetos procesales puedan acceder en sus sedes a las actuaciones virtuales.

**PARÁGRAFO 3. En caso de requerirse el cumplimiento de las funciones de la Rama Judicial de manera remota o por medios digitales, el Gobierno Nacional y el Consejo Superior de la Judicatura deberán** garantizar a cada uno de los servidores judiciales las herramientas tecnológicas y las garantías de conectividad suficientes para adelantar el trámite de los procesos judiciales y asuntos en curso.

**ARTÍCULO 3°. Modifíquese el artículo 4 del Decreto Legislativo 806 de 2020, el cual quedará así:**

**Artículo 4. Expedientes digitales.** El Consejo Superior de la Judicatura, a través de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y del Centro de Documentación Judicial-CENDOJ-, **implementará** el Plan de Digitalización de la Rama Judicial y la digitalización de los documentos del expediente digital de todos los procesos judiciales en curso, bajo estándares fijados en la Ley 527 de 1991 y de las que la reformen, en un término de (2) dos años contados a partir de la expedición de la presente Ley.

Para tal fin creará carpetas electrónicas actualizables para cada expediente conformado bajo los parámetros de gestión documental electrónica que fijará el CENDOJ **y los estándares fijados en la Ley 527 de 1991.**

**PARÁGRAFO. El Gobierno Nacional y el Consejo Superior de la Judicatura garantizarán y destinarán los recursos necesarios** para lograr la digitalización total de los procesos judiciales con el apoyo de talento humano del Servicio Nacional de Aprendizaje.

**ARTÍCULO 4. Adiciónese un parágrafo al artículo 8 del Decreto Legislativo 806 de 2020, el cual quedará así:**

**PARÁGRAFO 3.** La Registraduría del Estado Civil, en el marco de la implementación de los servicios ciudadanos digitales y a sus funciones, en especial las relacionadas con la identificación de los colombianos, propenderá por incluir en el registro de la cédula digital los datos correspondientes al correo electrónico, con el fin de facilitar la notificación personal de los procesos judiciales.

**ARTÍCULO 5°. Adiciónese un artículo al Decreto Legislativo 806 de 2020, el cual quedará así:**

**Artículo 7A. Audiencias de Conciliación:**  Con la observancia plena de las garantías procesales se podrán adelantar las actuaciones dentro del trámite conciliatorio y las audiencias de conciliación por parte de los conciliadores de centros de conciliación, los servidores públicos facultados para conciliar y los notarios mediante el uso de medios tecnológicos o digitales.

Para tal fin, los Centros de Conciliación **y demás personas jurídicas de carácter público y privado que presten este tipo de servicios,** **propenderán** **por** la prestación del **servicio** mediante herramientas tecnológicas que faciliten la atención virtual ciudadana.

**ARTÍCULO 6°. Adiciónese un artículo al Decreto Legislativo 806 de 2020, el cual quedará así:**

**Artículo 11A.** Inspección Judicial: Cuando dentro de un proceso sea necesaria la práctica de la inspección judicial el juez podrá emplear medios tecnológicos y vehículos de control remoto, que garanticen la verificación y el esclarecimiento de los hechos materia del proceso.

**ARTÍCULO 7°. Adiciónese un artículo al Decreto Legislativo 806 de 2020, el cual quedará así:**

**Artículo 2A: Interoperabilidad de los sistemas de información.** Los sistemas de información utilizados por la Rama Judicial para adelantar y consultar los procesos judiciales deberán ser interoperables entre sí, con el fin de facilitar el cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales.

Para implementar lo dispuesto en este artículo, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura adoptará las medidas necesarias e incluirá en el Plan de Justicia Digital lo correspondiente, en complemento a lo dispuesto en el artículo 103 de la ley 1564 de 2012.

**Para cumplir con lo dispuesto en este artículo, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público garantizará los ajustes y apropiaciones presupuestales que sean necesarias**.

**ARTÍCULO 8°. Adiciónese un artículo al Decreto Legislativo 806 de 2020, el cual quedará así:**

**Artículo 11B. Orden y autorizaciones de pago virtuales.** Todas las órdenes y autorizaciones de pago de cualquier concepto de depósitos judiciales en procesos judiciales de todas las especialidades y jurisdicciones **deberán realizarse** a través **medios digitales. Para ello** el Consejo Superior de la Judicatura **habilitará un portal para poder realizar el pago** sin acudir a ningún trámite o actuación adicional que implique el diligenciamiento y firma en formatos en físico.

**Lo anterior, sin perjuicio de la habilitación de canales presenciales.**

**Para cumplir con lo dispuesto en este artículo, el Gobierno Nacional y el Consejo Superior de la Judicatura garantizarán los ajustes y apropiaciones presupuestales que sean necesarias**.

**Artículo 9°. Modifíquese el artículo 16 del Decreto Legislativo 806 de 2020, el cual quedará así:**

**Artículo 16. vigencia y derogatoria.** El presente decreto legislativo rige a partir de su publicación.

**Artículo 10. Vigencia.** La presente ley rige a partir de su promulgación.

De los honorables congresistas,

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**JUAN FERNANDO REYES KURI**

Representante a la Cámara por el Valle del Cauca

Partido Liberal

1. **REFERENCIAS**

Consejo de Estado (2019). Sentencia 02830, Sala Plena Contenciosa Administrativa. M.P.: Carlos Enrique Moreno rubio. Bogotá.

Consejo Superior de la Judicatura. (2019). *Informe de la Rama Judicial al Congreso de la República.* Bogotá D.C .

Consejo Superior de la Judicatura. (21 de 07 de 2020). PROTOCOLO PARA LA GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS,. *PLAN DE DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTES*.

Contraloría General de la República. (2020). COMUNICADO DE PRENSA No. 095.

Corte Constitucional (2020). Sentencia C-145 del 2020.

Restrepo, J. I. (2018). La rama judicial y la administración de justicia. En M. C. otros , *Lecciones de derecho constitucional Tomo II* (pág. 722). Universidad Externado de Colombia.

Rodrigo Uprimny Yepes, C. R. (2016). Congestión, tipos de procesos frecuentes. En V. autores., *Democracia, justicia y sociedad. Diez años de investigación en Dejusticia* (pág. 917). Bogotá: Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad.

Sentencia C-242, C-242 de 1997 (Corte Constitucional 1997).

Sentencia T-577 , T-577 de 1998 (Corte Constitucional 1998).

Gloria Stella López (2021) Comentarios Proyecto de Ley 436 de 2020C. Presidencia Consejo Superior de la Judicatura.

CEJ (2021). Percepción ciudadana sobre el Sistema Judicial colombiano. Obtenido de: <https://cej.org.co/indicadores-de-justicia/confianza-y-corrupcion/opinion-ciudadana-acerca-del-sistema-judicial-colombia/>

CSJ (2021), Comunicación audiencia pública PL 436 de 2020C.

Audiencia Pública PL 436 (2021). Obtenido de: : <https://www.youtube.com/watch?v=-EduVejfhE8>

1. Enlace audiencia publica: <https://www.youtube.com/watch?v=-EduVejfhE8>. En ella se podrá consultar las intervenciones completas de los asistentes. [↑](#footnote-ref-1)
2. Ley 270 de 1996 [↑](#footnote-ref-2)